



Juicio Contencioso Administrativo:
SUA/II/JCA/0258/2024.

Actor: *****.

Autoridades Demandadas:

1. Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas.
2. C. ***** , Policía Vial.

Sentencia Definitiva

Tepic, Nayarit; a cuatro de septiembre dos mil veinticuatro.

VISTOS para resolver los autos del Juicio Contencioso Administrativo SUA/II/JCA/258/2024, esta **Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit**¹, a cargo del **Magistrado Numerario licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez**, procede a emitir sentencia en el juicio promovido por***** , –en adelante parte actora–, en los siguientes términos:

RESULTANDO

1. Presentación de la demanda. El veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, se presentó ante Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por la parte actora, mediante el cual interpuso Juicio Contencioso Administrativo en contra **de la boleta de infracción con número de folio *******, emitida por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas, con fecha **cinco de enero de dos mil veinticuatro**.

2. Admisión de la demanda. El treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, mediante acuerdo se admitió trámite la demanda que promovió la parte actora, asimismo tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de su escrito inicial de demanda, concediéndosele la

¹A quien se referirá en adelante como “Segunda Sala”, salvo mención expresa, en concordancia con el Acuerdo General número TJAN-P-002/2023, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobado en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa SO-09/2023, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, se declara el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y de la Sala Colegiada de Recursos, de este Tribunal de Justicia, a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.



suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios. En ese mismo acto, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de diez días contestaran la demanda y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes.

3. Emplazamiento. El veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, se emplazó a las autoridades demandadas, tanto de los hechos imputados por la parte actora como de sus conceptos de impugnación, actuación visible a foja 22 del expediente en que se actúa.

4. Cumplimiento a la suspensión. Mediante oficio recibido en este Tribunal el día ocho de marzo de dos mil veinticuatro, la autoridad demandada dio cumplimiento a la suspensión del acto impugnado, remitiendo la licencia de conducir retenida al accionante, la cual, le fue devuelta el día diecinueve de abril de esta anualidad, tal y como consta en el acta glosada a foja 23 de autos.

5. Contestación de la demanda. El ocho de marzo de dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio a través del cual, el Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas dio contestación a la demanda incoada en su contra; a lo cual, recayó un auto en fecha tres de mayo de dos mil veinticuatro, en el que tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma a dicha autoridad, teniéndole por ofrecidas y admitidas las pruebas de su oficio de contestación de demanda, ,mas no así al diverso demandado, *****; quien no compareció a juicio, por lo que se le declaró confeso; dicho auto fue notificado y se ordenó correr traslado a la parte actora, a efecto de que se impusiera oportunamente dela contestación hecha valer por la primera de las autoridades enjuiciadas, para que estuviera en aptitud de formular alegatos el día de la audiencia.

6. Celebración de audiencia. El día veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia de juicio prevista por el artículo 226 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en la cual se asentó la inasistencia de las partes, no obstante, de haber sido previamente notificadas; se desahogaron las pruebas



admitidas y se les declaró precluido el derecho de formular alegatos a las partes, toda vez que ninguna de ellas los hizo valer. En ese mismo acto, se acordó turnar para resolución el juicio en que se actúa, acorde a lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, sentencia que hoy se pronuncia de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia. Con fundamento en los artículos 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 4, fracciones IV y V, 23, 109, 119, 229 y 230 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit², 1, 4, fracción XIV, 5, fracción II, 7, fracción II, 19, fracciones III y VII, 33, 37, 39, 40, 41, fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit; así como el Acuerdo General No. TJAN-P-02/2023³, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y el Acuerdo General No. TJAN-P-03/2023⁴, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Administrativa, celebrada el trece de octubre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa es constitucional y legalmente competente para conocer, tramitar y resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, en razón de que se plantea una controversia administrativa entre autoridades de la Administración Pública Municipal y un particular, donde ejerce jurisdicción y competencia este Órgano Jurisdiccional.

² En adelante como "Ley de Justicia".

³ Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se determina el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extingue la primera y segunda sala administrativa, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual contempla una nueva integración, organización y funcionamiento de este Tribunal.

⁴ Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se aprueba la adscripción de los Magistrados que integrarán las Salas Unitarias Administrativas, y a su vez, se establecen las nomenclaturas y el esquema de turnos de los asuntos de su competencia, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.



Segundo. De las causales de improcedencia o sobreseimiento. De conformidad con los artículos 148⁵ y 230, fracción I⁶ de la Ley de Justicia, las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público e interés social, las cuales deben resolverse previamente al estudio del fondo de este Juicio Contencioso Administrativo, las pongan o no las partes, pues son de estudio preferente al tratarse de impedimentos legales que no permiten el estudio del fondo del asunto, por tanto, el juzgador debe primeramente analizarlas, pues de lo contrario se causarían evidentes daños y perjuicios a las partes promoventes.

Por lo anterior, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa se aboca al estudio y resolución de las causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento; en este caso, las autoridades demandadas no hicieron valer ninguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento establecidas en la Ley de Justicia, y, toda vez que, de manera oficiosa tampoco se advierte la actualización de alguna, lo procedente es entrar al estudio del fondo de la controversia.

Tercero. Puntos Controvertidos. De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el presente juicio se centra en determinar si procede resolver la invalidez del acto impugnado consistente en **la boleta de infracción con número de folio ***** de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro**, como afirman las autoridades al contestar la demanda, el acto de autoridad es válido por encontrarse debidamente fundado y motivado.

Cuarto. Estudio de Fondo. En virtud de que esta Segunda Sala Unitaria Administrativa determinó que no se actualizaron causales de improcedencia que impidieran el estudio de fondo del presente asunto y una vez precisado en el considerando anterior en qué consiste la *litis* en el juicio que se actúa, se procede al estudio y resolución de los conceptos de impugnación expresados por la parte actora en su escrito

⁵⁴**Artículo 148.** Contestada la demanda, el magistrado instructor examinará el expediente, y si encontrare acreditada claramente alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, a petición de parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por concluido el juicio. En caso de que la causal no resultare clara, ésta se decidirá en la sentencia que resuelva la cuestión planteada.”

⁶**Artículo 230.** La sentencia que se dicte deberá contener:

I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso...”



de demanda.

Al efecto, y según el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no es necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciere valer el accionante en su escrito inicial, ni la contestación que produjera al respecto la demandada, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, por lo que en la presente sentencia definitiva no se transcriben por cuestiones de economía procesal y sentido ecológico, y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase.

Cabe hacer la precisión que lo anterior, no implica falta de cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es decir, sin que sea obstáculo para que en la presente resolución se estudien de manera exhaustiva, todas y cada una de las inconformidades planteadas, como lo prevé el artículo 230, fracción III⁷ de la Ley de Justicia, se sustenta lo anterior por analogía en la tesis jurisprudencial: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**⁸

Pues bien, previo al análisis de los conceptos de impugnación que hace valer la parte actora, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa estima necesario precisar que el texto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, estatuye que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Lo expuesto revela el imperativo de este Órgano Jurisdiccional de atender, en el ámbito de su competencia, en todas y cada una de sus determinaciones, resoluciones y sentencias, los invocados principios,

⁷“Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados; ...”

⁸Tesis: 2a./J. 58/2010, de Jurisprudencia, de la Novena Época, de la Instancia de la Segunda Sala, en materia Común, con registro 164618, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; de la fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.



sólo así, se garantizará el derecho humano de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 Constitucional.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio correspondiente a la Décima Época, con registro número 2012228, instancia Pleno, tipo de tesis Jurisprudencia, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y tres, agosto de dos mil dieciséis, tomo I, en materias constitucional y común, tesis P./J. 5/2016 (10a.), página once, con el rubro ***“DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL”***.

Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado el criterio formalista en que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de **violación** para ser tal debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos de autoridad reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

De ahí que, arribó al criterio que la expresión de los **conceptos** de **violación** no se haga con formalidades tan rígidas y solemnes y que la demanda no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como **conceptos** de **violación** todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la **causa** de **pedir**, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le **causa** el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.



Las consideraciones expuestas constituyen en la sustancia la jurisprudencia con registro 195518 de la Novena Época, cuya instancia es la Segunda Sala con el rubro **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.**

Precisado lo anterior, y analizada la demanda en forma integral como un todo, a los conceptos de impugnación, los argumentos hechos valer, las constancias que integran los autos, la Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Justicia Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, determina que los argumentos hechos valer por la parte actora en su segundo concepto de impugnación resultan esencialmente **FUNDADOS** por lo que es procedente resolver la invalidez del acto consistente en la boleta de infracción *********, de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro y la multa que esta trae aparejada, por las siguientes consideraciones:

La parte actora aduce que el acto de autoridad al que fue sujeta vulnera en su perjuicio, lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en la boleta de infracción levantada, no se expusieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó el acto que la autoridad le atribuyó.

Pues bien, le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, si bien es cierto que en la boleta de infracción la autoridad demandada sí invoca parcialmente el fundamento normativo de la infracción, también lo es que ésta adolece de motivación; puesto que, al asentar la descripción de la conducta que motiva la infracción, únicamente refirió:

“Artículo 98, fracc.IV. Por no respetar la luz roja o ámbar del semáforo.”

De lo que se advierte que la autoridad se limitó a simples apreciaciones personales, siendo que le corresponde la obligación de narrar de manera específica los hechos en que sustente que la conducta desplegada por el conductor del vehículo real e indudablemente



violentó la normativa de vialidad.

De ahí que, no basta señalar hechos genéricos y apreciaciones personales, sino que la obligación que posee la autoridad demandada consiste en relatar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como sucedieron todos y cada uno de los hechos en que apoye el proceder de su encargo. Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es obvio que las simples aseveraciones limitadas a una apreciación personal, corresponde a una falta de fundamentación y motivación que trae como consecuencia una violación a la esfera jurídica del actor.

Efectivamente, el agente de Policía Vial que impuso la infracción asentó en la correspondiente boleta que el conductor no respetó la luz roja o ámbar del semáforo, sin embargo, el citado agente no motivó ni estableció de manera detallada el hecho, si el conductor se pasó la luz ámbar o la luz roja, si se encontraba a bordo de una patrulla, si se encontraba en un cruceo a pie tierra, cuál fue el procedimiento que siguió para imponer la infracción, si utilizó advertencias sonoras, entre otras cosas que pudieran llevar a concluir que la infracción impuesta tuvo motivos claros e indubitables.

Luego, el artículo 118 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas, que establece el protocolo que deben seguir los Agentes de la Dirección de Tránsito, prevé lo siguiente:

“ARTÍCULO 118°. Cuando los conductores de vehículos cometan una infracción a lo preceptuado en este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, los Agentes de la Dirección de Tránsito deberán de proceder de la manera siguiente:

- I. Indicarán al conductor que detenga la marcha de su vehículo y estacionar el mismo en algún lugar donde no se obstaculice el tránsito.
- II. Se identificarán con su nombre y número de asignación;
- III. Señalarán al conductor la infracción que cometió y le mostrarán el artículo del Reglamento que lo fundamenta;
- IV. Solicitarán al conductor, para su revisión, la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.
- V. Cuando la infracción sea ocasionada por causas imputables al conductor y/o vehículo, se elaborará la boleta de infracción procediendo a retener la licencia



como garantía. A falta de esta, se retendrá la tarjeta de circulación del vehículo y a falta de ambas, se procederá a remitir el vehículo al depósito vehicular.

VI. Si el vehículo se encontrara estacionado o no está presente la persona que pueda o quiera atender el requerimiento del Agente de Tránsito, éste último elaborará la boleta de infracción conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del presente artículo;

VII. Efectuada una vez la revisión de los documentos y/o de la situación en la que se encuentra el vehículo, si los documentos se encuentran en orden, el Agente de Tránsito procederá a llenar la boleta de infracción, de la que extenderá la original al interesado, si se encuentra presente. De no encontrarse presente el propietario del vehículo infractor, y si la situación lo amerita, el Agente de Tránsito elaborará la boleta de infracción y la colocará entre el limpiador y el parabrisas del vehículo, retirará una placa y dará aviso de tal circunstancia al Agente que se encuentre de guardia.

VIII. Únicamente se remitirá el vehículo al depósito correspondiente, si la infracción cometida está prevista como tal en el presente Reglamento y por las infracciones señaladas en el artículo 127° de éste mismo.

IX. En el caso de vehículos no matriculados en el Estado de Nayarit, se les retendrá una placa como medida para garantizar el pago de la multa a que se hayan hecho acreedores por cualquier infracción cometida, cuya sanción deberá pagarse en el tiempo previsto en el presente Reglamento.

X. Tratándose de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas que participen en hechos de tránsito y tengan que ser remitidos al depósito de vehículos, se solicitará el apoyo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para el salvamento y arrastre del vehículo con las medidas de seguridad necesarias.”

Exigencias que en el caso concreto pasan inadvertidas por la autoridad demandada, puesto que carece de una debida motivación, así como de la descripción de hechos que motivaran la conducta infractora.

Consecuentemente, es inequívoco que el acto impugnado se encuentra investido de ilegalidad al no cumplir con los requisitos que marca la ley de la materia.

En consecuencia, ante la ausencia de legalidad del acto emitido por la autoridad demandada, no existe la certeza jurídica de que la conducta desplegada por el accionante haya sido contraria a lo establecido por la normativa aplicable, son aplicables por analogía al caso concreto las siguientes tesis:



La Tesis aislada de la Octava Época, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, visible en el Tomo XIV, Julio de 1994, página 626, del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dispone:

“INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACION NI MOTIVACION.

Aun cuando en un recibo de infracción de tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea a todas luces conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna.”

Así como la Tesis Aislada I.3o.C.52 K dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XVII, abril de 2003, página 1050, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra dispone:

“ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de



motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.”

Por tanto, la eventual multa que pudiera derivar de ello, es consecuencia de un acto ilegal; y en ese sentido, esa ilegalidad se extiende a dicho acto, con lo cual, lo procedente es que se invaliden, tanto la boleta de infracción como la posible multa que emana de aquella, por encontrarse ambas tildadas de ilegalidad.

Ahora, no pasan desapercibidas las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que, el accionante infringió el numeral 89, fracción IV, del Reglamento de Tránsito de ese municipio, sin embargo, aunado a que no existe constancia de ello, el presente juicio se ocupa de determinar si la actuación de la autoridad demandada fue realizada con apego o no, a la legalidad.

Por ello, con base en las consideraciones legales expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 231, fracción II, de la Ley de Justicia, es procedente declarar la **invalidez de la boleta de infracción******* de fecha **cinco de enero de dos mil veinticuatro**, por ende, de la eventual **multa** que pueda derivar de aquella.

Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa;

RESUELVE

Primero. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, de conformidad con las consideraciones vertidas en la presenten



sentencia.

Segundo. Se declara la invalidez lisa y llana del acto impugnado, consistente en la boleta de infracción número *****de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro, así como de la **multa** que deriva de ella.

Tercero. En su oportunidad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase el expediente al archivo como un asunto total y legalmente concluido.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas.

Así lo resolvió y firma el suscrito Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, Licenciado **Juan Manuel Ochoa Sánchez**, ante la fe del Secretario Proyectista, Licenciado **Juan Carlos Rodríguez Sotelo**.